

¿Quién debe ^{Arnoldo Leal T.*} financiar las CAMPAÑAS A LA PRESIDENCIA?

En este momento, importantes acontecimientos como la reelección presidencial, que aunque aprobada por el Congreso tuvo que sortear más de quince demandas en la Corte Constitucional; un Partido Liberal que tratando de recuperar el protagonismo de otras épocas parece que no va para ningún lado, y una izquierda representada en dos partidos políticos que han logrado posicionarse, tal vez por sus ideas o por el desespero de una parte de la población que no se siente identificada por el modelo del actual gobierno, surgió un debate que no tuvo la resonancia esperada por sus implicaciones económicas, políticas y éticas.

La definición de la Ley de Garantías Electorales vivió un momento crucial, que sólo despertó el interés de la opinión pública al ser el punto de discordia entre el Polo Democrático, el Uribismo y el Partido Liberal. ¿Quién debe financiar las campañas a la presidencia? Parece que lo único importante para algunos congresistas fue ¿qué porcentaje debía asumir el gobierno y cuál los particulares?, olvidando por completo lo más importante: las implicaciones en el ámbito económico y sobre el principio de que lo colectivo prima sobre lo individual.

Para realizar el análisis se debe partir de lo ya aprobado por el Congreso. El gobierno financiará el 80% de las campañas y los particulares el 20%. Esta decisión tomada por los honorables congresistas debió partir del

supuesto de que en Colombia viven ángeles y no personas. Para que esta ley tenga sentido, ningún ciudadano que colabore con una campaña política debe esperar algo a cambio. Sin embargo, hay quienes creen que esta visión es algo equivocada y se inclinan más hacia la explicación económica en la cual cada individuo busca su propio beneficio. Si tenemos en cuenta que en realidad son muy pocos los colombianos que tienen dinero para aportar a una campaña (en Colombia el 60% de la población es pobre según la Contraloría General de la Nación), el número de posibles donantes se hace muy reducido.

Si tenemos en cuenta que el tope para la primera vuelta es de 10.000 millones de pesos por candidato, esto significa que los particulares financiarían \$2.000 millones. Ahora, si el candidato pasa a una segunda vuelta recibirá \$6.000 millones adicionales, lo que quiere decir que los particulares financiarían otros \$1.200 millones. Por supuesto, esto está regulado y los aportes varían según si es una persona natural, jurídica o grupo económico.

De aquí surge una pregunta ¿cuántas personas en Colombia tienen la capacidad de aportar \$3.200 millones a una campaña presidencial? Si no tenemos en cuenta a los narcotraficantes, que por su situación estarían inhabilitados legalmente para apoyar alguna campaña, sólo nos quedan los grandes grupos económicos, que en este país se pueden contar con los dedos de una sola mano. Además, el he-

* Estudiante de Economía, Universidad Externado de Colombia.

Fotografía: Mauro Simonato. *El dinero*, 2000.

cho de que sean partidas fijas crea un obstáculo para cualquier candidato que no tenga el apoyo de un grupo económico. Debido a que si un candidato sólo consigue \$20 millones, el gobierno lo apoyaría con \$80 millones; mientras que otro candidato que consiga el apoyo de \$2.000 millones, obtendría una financiación de \$8.000 millones, lo cual claramente causa desigualdad en la disputa política.

Es ridículo pensar que alguien financie una campaña y no espere algo a cambio, en la política y en las relaciones internacionales no existen los amigos sino los intereses. Es difícil creer que este tipo de manejo electoral sea independiente de las decisiones de política, ya que pueden afectarse por los intereses de aquellos grupos económicos que en primera instancia apoyaron con dineros las campañas. Lo más grave es que lleva a que el interés particular prime sobre el interés general, esto es, si por evitar los efectos negativos sobre unos (persona natural, jurídica o grupo económico) se afecta a muchos (la sociedad). Evidentemente, el que las campañas políticas puedan ser financiadas por particulares permite que estos grupos se comporten como buscadores de renta, afectando las decisiones económicas y buscando generar beneficios propios.

La situación se complica si tenemos en cuenta que los dos principales grupos económicos del país controlan los dos medios de comunicación más importantes, lo cual lleva a que sea de vital importancia tenerlos como aliados más que como enemigos.

Es aquí donde se pone en evidencia el porqué existen las ya conocidas exenciones tributarias para diferentes sectores económicos, so pretexto de incentivar la inversión (ya que según el gobierno si los empresarios tiene baja carga de impuestos, estarán motivados a invertir más y por ende a crear más empleo), olvidando por completo que uno de sus principales obstáculos son los excesivos costos

de transacción que existen en Colombia. Por supuesto, es difícil que estos costos tengan una pronta solución, puesto que son el alimento diario de la burocracia. Entre más trámites, mayor es la cantidad de organismos necesarios para éstos, y mayor es la probabilidad de que las personas tengan que tomar el camino de la ilegalidad por medio del soborno, con el fin de agilizar el papeleo.

Cuántas decisiones económicas importantes para el desarrollo del país se dejarían de tomar sólo porque afectan a un sector, empresa o particular que apoyó al candidato que luego es Presidente. Si viviéramos entre ángeles esto no debería preocuparnos, el problema es que no es así, y cualquier apoyo económico tendrá un efecto en el futuro. Es por esto que es inexplicable que este debate no haya tenido la difusión suficiente, tal vez porque para muchos fue un avance debido a que antes de la Ley de Garantías las campañas eran financiadas significativamente por la empresa privada. Sin embargo, al ser menor la cantidad de dinero que aporta el sector privado es más fácil para las grandes empresas monopolizar estos aportes, esto significa que la “deuda” de los candidatos sería únicamente con ellos, lo cual genera mayor influencia sobre las decisiones del gobierno que, por supuesto, va a estar dirigida a lograr mayores beneficios económicos para los particulares.

Por esta razón es preferible que el gobierno ajuste sus gastos y financie las campañas políticas en su totalidad, esto significa que todos los contribuyentes las pagaríamos. Aunque parezca descabellado, es mejor para la democracia, porque permite que el gobierno pueda actuar con objetividad y opere con autonomía, evitando así que las decisiones del Presidente estén supeditadas a la conveniencia de unos pocos que, nos guste o no, buscan su propio beneficio.